**ZARATE ALEJANDRO C/ ESTADO PROVINCIAL S/ INCIDENTE DE
SUSPENSION DE LA EJECUCION DE DECISION ADMINISTRATIVA.
EXPTE. N°2353**

En Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos, a los diez (10) días de diciembre de dos mil veinticuatro, reunidos la Señora Vocal y los Señores Vocales, miembros de la Cámara en lo Contencioso Administrativo N° 1, a saber: **ADRIANA ACEVEDO, HUGO RUBÉN GONZALEZ ELIAS** y **MARCELO BARIDÓN**, asistidos por la Secretaria autorizante, fueron traídas para resolver las actuaciones caratuladas: **"ZARATE ALEJANDRO C/ ESTADO PROVINCIAL S/ INCIDENTE DE SUSPENSION DE LA EJECUCION DE DECISION ADMINISTRATIVA"**.

Practicado el sorteo de ley, resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: **GONZALEZ ELIAS, BARIDON, ACEVEDO**.

Examinadas las actuaciones el Tribunal se planteó la siguiente cuestión para resolver: ¿Corresponde hacer lugar a la demanda promovida por el actor? ¿Cómo deben imponerse las costas?.

**A LA CUESTIÓN PROPUESTA, LOS SEÑORES VOCALES GONZALEZ ELIAS y MARCELO BARIDON DIJERON:
ANTECEDENTES:**

1. Se presentó el señor **Alejandro Zarate**, abogado por derecho propio, en su calidad de Oficial Principal de la Policía de Entre Ríos, Escalafón Jurídico y promovió medida precautelar contra la Policía de la Provincia de Entre Ríos y/o el Estado Provincial (mal denominado "Superior Gobierno de Entre Ríos") a fin de que se suspenda la aplicación de la sanción de 15 días de arresto que le fuera impuesta en el marco de una información sumaria administrativa que culminó con el dictado de la Resolución JFO SP N° 060/2023 de fecha 19/09/2023, confirmada por el Decreto MSJ N° 2790, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo en la demanda contencioso administrativo y de inconstitucionalidad a interponer.

Fundamentó la cautelar en evitar lesiones y vulneraciones a sus derechos constitucionales; justificó la competencia del Tribunal y citó el art. 51 inc. b) de la Ley de Procedimientos Constitucionales N° 8369 con el

PODER JUDICIAL DE ENTRE RIOS
CAMARA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
N° 1 - PARANA

fin de impugnar la validez constitucional del art. 171 inc. b) y 174 de la ley provincial 5.654/75 -Reglamento General de la Policía de Entre Ríos- con la pretensión de obtener una sentencia declarativa de inconstitucionalidad de tales disposiciones y su inaplicación al caso concreto en el proceso ordinario.

Afirmó la inconstitucionalidad de la sanción disciplinaria de arresto por entender que viola de manera manifiesta e ilegítima el principio republicano de la división de poderes, al asignarse la Policía de Entre Ríos - que se halla bajo el mando del Poder Ejecutivo- la facultad de imponer penas privativas de la libertad; hizo referencia a jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Suprema Nacional y del Superior Tribunal de Justicia que aluden a las garantías constitucionales que deben ser respetadas en el procedimiento disciplinario.

Se agravió invocando la desproporcionalidad y el exceso de punición de la sanción impuesta, ya que no guarda razonabilidad con las faltas que se le atribuyeron; por ello calificó a la medida disciplinaria como inconstitucional en tanto viola de manera manifiesta e ilegítima el principio republicano de división de poderes.

Advirtió que la investigación previa a la sanción cuestionada se desarrolló sin su intervención y sin respetarse los plazos procesales útiles, infringiendo el art. 203 del RGP aplicable por analogía, el cual exige una duración total de 30 días sólo prorrogable por 15 días más, observando que los plazos procesales se computan por días corridos.

Desarrolló argumentos para justificar la verosimilitud en el derecho de lo pretendido y lo relacionó con el peligro en la demora que implicaría diferir lo pedido para el momento de la sentencia de fondo.

Fundó en derecho; ofreció prueba y finalmente pidió se haga lugar a la medida requerida.

2. Contestó la vista corrida el **Estado Provincial** por medio de su representante constitucional en juicio, la Fiscalía de Estado, presentándose -por ella- su titular, el letrado, Julio Cesar Rodriguez Signes, junto a Pablo Giannini, Fiscal de Estado Adjunto y la abogada Romina Noé, integrante del organismo y solicitaron el rechazo de lo pretendido por Zarate.

Afirmaron que no se encuentra acreditada la verosimilitud

**PODER JUDICIAL DE ENTRE RIOS
CAMARA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
N° 1 - PARANA**

del derecho invocado, en tanto el actor alegó una supuesta arbitrariedad e ilegalidad del accionar policial en la instrucción del procedimiento disciplinario seguido en su contra que no ocurrió.

Consideraron que se advirtieron elementos suficientes que sustentaron el dictado del acto sancionatorio -Resolución JFOSP N° 60/23- y que constituyen material probatorio que debería ser valorado por el Tribunal en el juicio principal.

Relataron que el procedimiento disciplinario seguido al actor tiene su origen en los acontecimientos ocurridos el día 09/03/2023 y que se relacionan con que el Oficial Ppal. Zarate, habiendo sido designado abogado defensor en las actuaciones disciplinarias iniciadas al Cabo de Policía Edgar Rodriguez se negó a aceptar dicho cargo, comportándose de forma agresiva e irrespetuosa hacia sus pares y superiores, actitud que ha sido adoptada en otras oportunidades, constituyendo un acto de indisciplina policial que corresponde sea sancionado.

Efectuaron una descripción del marco jurídico en el cual se asienta la sanción aplicada, y respecto del cual - dijeron- el agente aceptó someterse voluntariamente desde el momento de su ingreso a la fuerza policial.

Sostuvieron que se le garantizó ampliamente su derecho de defensa y que no se advierte una desproporcionalidad entre la conducta reprobada al agente policial y la sanción de 15 días de arresto aplicada.

Recordaron la autolimitación en la evaluación de la discrecionalidad administrativa en materia disciplinaria en el control judicial de su legitimidad por el poder judicial.

Agregaron que no se encontraría acreditado el peligro en la demora y aludieron al interés público en juego.

Ofrecieron prueba y solicitaron, entre otras cuestiones, se rechace la cautelar pedida con imposición de costas al promoviente.

3. Oportunamente, la Señora Fiscal de Coordinación del Fuero, **Aranzazu Barranteguy**, opinó que la cautelar pedida debía ser desestimada.

Para llegar a ese consejo, describió sucintamente los hechos del caso y las posturas de las partes y luego ponderó la incidencia como inadecuada, ya que amerita, por las variadas aristas que comprende, una

discusión más profunda en un proceso ordinario.

Sostuvo que no surge evidente ni manifiesto la verosimilitud de lo pedido por el actor, sino que precisa una investigación y un conocimiento que no es posible producir en este marco procesal.

FUNDAMENTOS:

4. Por el orden lógico de las pretensiones corresponde analizar el pedido cautelar respecto de la declaración de inconstitucionalidad de las normas puestas en crisis por Zarate.

En tal sentido, basta recordar la postura restrictiva que la jurisprudencia ha adoptado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en relación a la necesaria consideración de los límites que el juez debe ponderar al revisar si las disposiciones normativas cuestionadas superan el test constitucional cuando expresó *"el mérito o la conveniencia de las soluciones legislativas no son puntos sobre los que el Poder Judicial deba pronunciarse (Fallos: 313:410), por lo que la declaración de inconstitucionalidad de una ley -acto de suma gravedad institucional- no puede fundarse en apreciaciones de tal naturaleza, sino que requiere que la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable (Fallos: 314:424)"*.

El criterio restrictivo se acentúa si el marco es meramente cautelar, en tanto se requiere una mayor repugnancia de las normas bajo análisis para que se decida que sean provisionalmente suspendidas en su aplicación.

Por ello, se rechaza la pretensión de suspensión de efectos basadas en la inconstitucionalidad pedida por Zarate, la que bien puede ser analizada en el proceso principal.

4.1 Preliminarmente, se aclara que todo el desarrollo argumentativo que sigue pretende resolver la incidencia desde el acotado margen que permite la materia cautelar, por eso se lo realizará con respecto a ciertos agravios que opone Zarate al acto administrativo definitivo y causatorio de estado, es decir, el Decreto N° 2790 MSJ del 01/10/2024 en relación al que dispuso la sanción de prisión y sus precedentes, entre ellos, el inicial la Resolución JFOSP N° 60/23.

En este marco, se enfatiza que no deberá considerarse de ninguna manera que las alegaciones que se efectúen implican un adelanto

**PODER JUDICIAL DE ENTRE RIOS
CAMARA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
N° 1 - PARANA**

de la opinión a sustentar en la eventual sentencia a dictarse en el proceso principal ya que, en aquélla oportunidad, podrá verificarse con mayor profundidad la prueba que se disponga en base a las argumentaciones de las partes sobre el fondo de los planteos a resolver.

4.2 El primer agravio a considerar reposa en la alegada afectación de la garantía a la defensa en juicio o como también se ha denominado la garantía a la "tutela *administrativa* efectiva", invocado por Zarate en la tramitación del procedimiento disciplinario que desembocó en la sanción aplicada.

Como ambas partes han sostenido en sus escritos, el ejercicio de la potestad disciplinaria y su eventual consecuencia, la aplicación de una sanción, presuponen un previo procedimiento administrativo como garantía del derecho de defensa, que corresponderá sea de mayor o menor complejidad según el caso pero que, en principio, necesariamente deberá observarse en forma previa al ejercicio de tal potestad.

En el marco del procedimiento administrativo, el reconocimiento del "debido proceso adjetivo" es la reglamentación procesal administrativa de la garantía de defensa en juicio, reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 10), en la Convención Americana de Derechos y Deberes Humanos (artículos 8.1.) y artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, incluido en el concepto -más moderno- de la "tutela judicial y administrativa efectiva" adoptado por la Corte Suprema de Argentina en la causa "Astorga Bratch" y previsto en forma expresa en el artículo 24 de la Constitución española; artículos 14 y 16 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 65 de la Constitución Provincial de Entre Ríos, entre muchos otros ordenamientos estatales.

Pero también, desde otro ángulo, este procedimiento (elemento esencial de la "forma" del acto administrativo) es imprescindible para el funcionario competente a fin de que pueda valorar dicha conducta y decidir la suerte del agente investigado. También posibilita que los ciudadanos tomen conocimiento del actuar de sus funcionarios -tanto de los sancionados como de los sancionadores-.

Recordemos que las formas en el derecho administrativo

PODER JUDICIAL DE ENTRE RIOS
CAMARA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
N° 1 - PARANA

cumplen la función de proteger las garantías de los derechos constitucionales de los administrados, como asimismo del orden, acierto, justicia y legalidad que debe existir en la actividad administrativa que permita el adecuado control interno y externo de ella.

Para que el agente investigado pueda ejercer debidamente el derecho de defensa, constituye su presupuesto el derecho a que se le informe detallada y pormenorizadamente los hechos que se le imputan y el encuadre jurídico de la falta que se le atribuye.

Ese debido informe se asimila a la acusación en un proceso penal; siendo aplicable el criterio de la Corte Suprema en el sentido de que las garantías constitucionales del debido proceso y de defensa en juicio exigen que la acusación contenga un detalle preciso de la conducta imputada, a efectos de que el procesado pueda ejercer en plenitud su derecho a ser oído mediante su descargo, así como el de hacer valer todos los medios que conduzcan a su defensa conforme a las leyes de procedimientos.

Este presupuesto no puede ser eludido en ningún supuesto, aun en el caso de faltas disciplinarias objetivas, por ejemplo, superar un número determinado de inasistencias sin aviso o reiteración de incumplimientos de labores medidas numéricamente); concretamente, no corresponde la aplicación de sanción alguna sin observar este recaudo previo.

Efectuado el desarrollo del marco jurídico a ser confrontado con los hechos jurídicos y los actos cuestionados, siempre en forma provisional y meramente general en su análisis, puede verificarse que la utilización de un procedimiento denominado como "información sumaria" no cercenó la garantía al debido procedimiento de Zarate.

En efecto y si bien es cierto que, usualmente la información sumaria es un procedimiento de investigación previo a la determinación de otro, al que le sirve de soporte (habitualmente sería un sumario administrativo), según las constancias de la causa, Zarate pudo informarse de los cargos de hecho y derecho que serían objeto de averiguación en ese procedimiento seguido que lo tenía como principal protagonista (Ver movimiento electrónico 05/11/2024 08:19 hs., "parte 2", Resolución N° 028 del 14/05/23 JFOSP fs. 31/40) y defenderse ampliamente.

Por ello, el rótulo impreso al procedimiento no se condice con su aparente limitación en lo que es sustancialmente importante para verificar si -en forma concreta- le fue afectado su derecho de defensa.

El acto de inicio se encuentra sumamente fundado y su artículo 1° claramente establece su objetivo "*establecer y/o deslindar responsabilidad administrativa que le pudiese corresponder al funcionario Of. Ppal. Zarate...*"

Ello demuestra que, desde el origen, el actor pudo conocer, no sólo los hechos que se considerarían posibles inconductas, sino también la eventualidad de la aplicación de una sanción, lo que le permitió defenderse de manera adecuada y amplia, lo que efectivamente hizo con variadas presentaciones en pos de alegar y justificar sus actos.

La primera conclusión provisional conduce a considerar al procedimiento disciplinario seguido a Zarate que desembocó en la aplicación de una sanción, apegado a la juridicidad.

4.3 El restante reproche digno de análisis provisional es el que el actor reputa como desproporcionalidad de la pena asignada, la que califica como viciada por "exceso de punición", al aplicársele una sanción de arresto -privativa de la libertad ambulatoria- en relación a una falta que la propia autoridad administrativa califica como "leve".

El agravio es atendible en este examen provisional, en tanto, existe una ausencia de correlación entre la imputación de una falta disciplinaria calificada como "leve" y la aplicación de una sanción -claramente- "grave" como lo es la de arresto; sanción que, como se sabe, implica la privación de la libertad ambulatoria, pena que es la de máxima rigurosidad.

La desproporción entre el encuadre de la clase de falta disciplinaria atribuida a Zarate -"leve"- con la sanción aplicada -"15 días de arresto"- aparece evidente en este marco provisional de análisis.

Nótese que los actos administrativos que fueron dictados y por los cuales se le aplicó la sanción de arresto a Zarate en coincidencia con los que fueron rechazando los recursos que el actor interpuso a ellos (Resolución N° 028 JFOSP del 14/05/2023 ver: Reg. Inf. del 05/11/2024 08:19 hs pág. 31/40; Res. Int. N° 46 del 10/08/2023, Reg. Inf. del 05/11/2024,

PODER JUDICIAL DE ENTRE RIOS
CAMARA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
N° 1 - PARANA

08:21 hs. "parte 4" pág. 41; registro de igual fecha "parte 5" Res. JFOSP N° 60/23 del 19/09/2023 págs. 15/19; Reg. Inf. de las 08:22 "parte 6", Res. DP N° 2156 del 31/10/2023 fs. 51/53; Reg. horario 08:23 "parte 7" Decreto N° 861 MSJ del 17/04/2024 fs. 35/37; Reg. Inf. del 05/11/24 "parte 1" 08:19 hs fs. 43), fundaron la sanción en un único hecho (más allá que se haya mencionado muy vagamente que, en realidad, era una forma de comportamiento habitual de Zarate), que se pasa a relatar en sus aspectos relevantes: *"el día 09 de Marzo de 2023, ...cuando se hiciera presente en sede de la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar el funcionario encartado en autos, quien conforme a la citación cursada por el Oficial Ayudante LAZARO, Riquelme, instructor actuante del Sumario Administrativo... debiendo ser formalmente Notificado de la aceptación del cargo de Abogado Defensor de Oficio como fuera asignado desde la División Asesoría Letrada -DAG, siendo imposibilitada tal medida debido a que en la hora antes descripta, el Oficial Riquelme se encontraba sustanciando un Mandamiento Judicial ...por lo que ante la premura de la situación vertida y el impedimento de practicarse la diligencia a la que fuera comisionado el investigado en autos, este luego de ser interiorizado de lo acontecido **opta por retirarse solicitando el asiento de una constancia en el libro de guardia de su comparencia y plasmando luego en un escrito la vulneración del derecho de defensa que debía resguardar al no ser atendido en los minutos que se hiciera presente en la dependencia en mención; por lo que ante la ocurrencia de los hechos narrados, resultó pertinente impulsar la instrucción de la pesquisa sumarial (...) que el comportamiento del Oficial Principal Zarate Alejandro, no fue acorde a las funciones para las cuales había sido designado, comportándose en forma agresiva hacia sus pares.- Que luego de haber analizado la totalidad del presente considero que existe un comportamiento antirreglamentario y reiterativo en el modus operando del Oficial Zarate Alejandro, el cual resulta reprochable administrativamente y merecedor del correctivo disciplinario que la autoridad ordenadora de estos actuados crea pertinente. Que conforme (al) acervo de pruebas producidas y recolectadas en autos, se puede concluir, que hasta el momento, no concurren los elementos de convicción mínimos para habilitar la apertura de una***

instancia investigativa superior, como es el Sumario administrativo, que respecto a la conducta desplegada por el funcionario Zarate, Alejandro, puede observarse que la misma se circunscribe a la comisión de una falta del Régimen Disciplinario de carácter leve (...)
Que el investigado no guardo su compostura con sus camaradas vislumbrando de los acontecimientos descriptos una clara falta de decoro en el cumplimiento de las funciones policiales, las observaciones indebidas hacia sus superiores jerárquicos en asuntos de servicio, manteniendo una disputa fuera de lugar entre el personal carente de respeto, ello afecta notablemente la imagen de la Fuerza que se encundra al servio de la sociedad, para brindar respuestas, no para generar problemas a la institución, deduciendo que dicho accionar se efectúa netamente en contradicción a los parámetros consagrados y exigidos por nuestra Ley Orgánica Policial" (lo destacado no es del original sino que tiene por fin poner énfasis en las declaraciones relevantes al desarrollo argumental).

Se reitera que el único hecho imputado descrito suficientemente y que la propia autoridad administrativa calificó como "leve" no es objeto de cuestionamiento como indisciplina en esta sede, sino que se analiza la gravedad y cuantía de la sanción que se le aplicó, la más grave de todas, la privación de la libertad ambulatoria; pero no solo eso, sino -su cuantía- por un tiempo elongado: 15 días.

La unidad del derecho represivo y las garantías ínsitas en el Estado Constitucional de Derecho conducen a la aplicabilidad a las faltas disciplinarias de los principios propios del derecho penal sustantivo. Si bien la mayor parte de esos principios provienen directamente del Código Penal, su base radica en los preceptos y garantías constitucionales, tanto nominadas como innominadas (v.gr. la garantía de razonabilidad). Su aplicación se efectúa, por lo general, en forma supletoria o directa, aun cuando en ciertos supuestos nada impide acudir a la técnica de la analogía, a condición de que ella opere a favor del administrado.

Entre ellos, corresponde analizar el propuesto por el actor, denominado "exceso de punición", el cual exige que exista una relación de proporcionalidad entre la pena prevista en la norma y la conducta del agente, sobre la base de la regla de razonabilidad, cuya valoración debe

PODER JUDICIAL DE ENTRE RIOS
CAMARA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
N° 1 - PARANA

responder a la realización del bien jurídico tutelado y su significado social, que configura la finalidad perseguida por la ley, su verificación provoca la nulidad absoluta del acto administrativo sancionatorio viciado.

Como se ha demostrado, existe suficiente verosimilitud en el derecho invocado por Zarate para verificar provisionalmente que no corresponde que la sanción de una falta disciplinaria calificada por la autoridad administrativa como "leve", en base a una conducta consumada con un sólo hecho que se muestra coincidente con tal encuadre le corresponda la aplicación de una de las sanciones más graves que existen en todo el derecho punitivo estatal por un lapso temporal significativamente extenso.

El peligro en la demora también se muestra evidente, ya que la consumación de la sanción disciplinaria, es decir, su ejecución podría generar daños en la esfera jurídica de los derechos humanos de Zarate que merecen ser protegidos en justicia oportunamente.

El interés público en juego no se vislumbra afectado por el despacho favorable de la cautela, a todo evento, si la Administración Pública advirtiera que existen razones que demuestren lo contrario, podrá tramitar el pedido de levantamiento del despacho provisionalmente dispuesto o, incluso, aguardar al dictado de una sentencia eventualmente favorable a su postura, lo que implicaría -en definitiva- sólo diferir la efectividad de la ejecución de la sanción a un momento futuro, nada más.

Como puede verificarse, el despacho cautelar en este especial caso, es justificado.

Se reitera que el análisis que el Juez debe realizar en materia de medidas cautelares es de mera probabilidad, de allí que sea necesario que se pruebe la "verosimilitud en el derecho" (*fumus boni juris*) y/o la eventual producción de un daño que no necesariamente deba ser irreparable o sumamente grave, llevado al caso, como se expresó en el párrafo anterior, de concretarse el arresto de Zarate, el daño podría consumarse y la sentencia ulterior favorable a sus intereses ya no podría ser lo efectiva que hubiese sido, mientras que diferir su ejecución para el momento de la firmeza de una sentencia favorable al Estado no provocaría daño alguno a ninguna de las partes.

Al caso también permite aplicarse la teoría de los "vasos

**PODER JUDICIAL DE ENTRE RIOS
CAMARA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
N° 1 - PARANA**

comunicantes", ya que aquí se repotencian la presencia de suficiente verosimilitud en el derecho junto a un tangible peligro en la demora (Ver: "*POLO, LORENZO FAUSTO Y OTROS C/ COLEGIO PROFESIONAL DE MAESTROS MAYORES DE OBRAS Y TÉCNICOS DE ENTRE RIOS S/ MEDIDA CAUTELAR PROHIBICIÓN DE INNOVAR*", Expte. N° 319, sentencia del 30/07/2015; Reit.: "*BARZAN, FERNANDO JAVIER C/ MUNICIPALIDAD DE PARANÁ S/ INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE DECISIÓN ADMINISTRATIVA*" Expte N°506 del 30/05/2017; "*ROMERO CLAUDIA ANGÉLICA C/ CONSEJO GENERAL DE EDUCACIÓN S/ MEDIDA CAUTELAR INNOVATIVA*", Expte. N° 721, del 07/08/2018; entre otros).

5. Conclusión, corresponde hacer lugar a la medida cautelar pretendida por **Alejandro Zarate** y disponer la suspensión del Decreto N° 2790 MSJ del 01/10/2024, de la Resolución JFOSP N° 60/2023 y de todo acto administrativo que se oponga a la presente, en cuanto a la ejecución de la sanción aplicada que consiste en el arresto del actor por 15 días, mientras tramite la causa principal, debiendo la demandada abstenerse de hacer efectiva la pena.

6. Previo a efectivizar la medida cautelar ordenada, el actor, deberá cumplimentar con la caución juratoria para responder personalmente por los perjuicios que podrían provocarse de haberse pedido sin derecho.

COSTAS Y HONORARIOS:

7. Las costas se imponen a la parte vencida/demandada, siguiendo el criterio que propugna el artículo 65 del CPCyC por remisión del artículo 88 del CPA.

La regulación de los honorarios profesionales se difiere para el momento en que la causa principal finalice.

Así se vota.

A SU TURNO, LA SEÑORA VOCAL ACEVEDO, manifiesta que hace uso de la facultad de abstención, prevista legalmente (artículo 47 de la LOPJ 6902).

Con lo que no siendo para más, se dio por finalizado el acto quedando acordada la siguiente sentencia:

SENTENCIA:

PARANÁ, 10 de diciembre de 2024

PODER JUDICIAL DE ENTRE RIOS
CAMARA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
N° 1 - PARANA

VISTO:

Por los fundamentos del Acuerdo que antecede y lo dictaminado oportunamente por el Ministerio Público Fiscal;

SE RESUELVE:

I. HACER LUGAR a la medida cautelar impulsada por **ALEJANDRO ZARATE** contra el **ESTADO PROVINCIAL** y, en consecuencia, **SUSPENDER** los efectos del Decreto N° 2790 MSJ del 01/10/2024, de la Resolución JFOSP N° 60/2023 y de todo acto administrativo que se oponga a la presente, mientras tramite la causa principal, debiendo la demandada abstenerse de hacer efectiva la pena de arresto de 15 días al actor.

II. DISPONER que, previamente a la efectivización de la medida, el **actor preste caución juratoria**, la que se instrumentará por Secretaría del Tribunal.

III. IMPONER las costas a la demandada vencida (art. 65 CPCYC por remisión del art. 88 del CPA).

IV. DIFERIR la regulación de los honorarios profesionales.

Regístrese, notifíquese en la forma prevista en los arts. 1 y 4 del Reglamento de Notificaciones Electrónicas (Ac. Gral. N° 15/18 STJER), dejándose expresa constancia que la presente se suscribe mediante firma digital sin soporte papel.

Adriana Acevedo. Presidenta -*abstención*-

Marcelo Baridón. Vocal de Cámara.

Hugo Rubén Gonzalez Elias. Vocal de Cámara.

Se registró. CONSTE.

María Magalí Olalla. Secretaria Suplente.

El presente documento se encuentra firmado digitalmente, con certificados emitidos por ONTI.
La verificación se efectúa en www.firmar.gov.ar, mediante Acrobat Reader o aplicación similar.